

Negociar los presupuestos con cinco gobiernos



LA AGUJA DE MAREAR

Javier Ayuso

Entrada ya la segunda quincena de septiembre, los españoles siguen sin conocer los datos básicos de lo que pueden ser los Presupuestos Generales del Estado para 2021; un año clave para encarar la reconstrucción económica y social de España con el apoyo de los 140.000 millones de euros de ayudas de la Unión Europea. La Constitución establece que el Gobierno debe enviar al Parlamento el proyecto de Ley antes del 30 de septiembre de cada año y a día de hoy ni siquiera se han presentado los dos aspectos básicos para su elaboración: el objetivo de gasto y la senda del déficit.

Por mucho que quieran acelerar en los próximos días, el gobierno de coalición ya debe de ser consciente de que el próximo año se iniciará con otra prórroga, la tercera, de los Presupuestos de 2018, elaborados por Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda del PP. Como dicen en Madrid, todo el ruido que están haciendo desde el Ejecutivo para vender los primeros presupuestos sociales de la democracia es “mucho arroz para tan poco pollo”.

Lo peor de todo, además de que desde el Ministerio de Hacienda sigan sin presentar ni una sola cifra, es que la tan careada negociación se ha convertido ya en un auténtica Torre de Babel, en la que cada uno de los protagonistas habla un idioma diferente y defiende una política muy distinta. En los primeros escarceos de conversaciones están saliendo a relucir asuntos que nada tienen que ver con las cuentas públicas y que auguran unos presupuestos *Frankenstein* en toda regla.

La negociación se está llevando a cabo desde cinco gobiernos diferentes. Sí, sí, cinco. Por un lado, está la presión de la Generalitat de Cataluña, por otro las peticiones del Gobierno Vasco y, por último, los tres gobiernos diferentes que conviven en La Moncloa y que están representados por Pablo Iglesias, Nadia Calviño y el propio presidente, Pedro Sánchez, que dirige todas las operaciones como un auténtico corredor de *rallies*: con continuos volantazos y derrapajes, y mucho polvo en la carretera que impide ver lo que realmente está pasando.

A día de hoy, todo son propuestas y contrapropuestas; algunas, las menos, con números, y casi todas con exigencias alejadas de lo que debe ser un marco presupuestario. Esta misma semana, EH Bildu ha propuesto un trueque de presupuestos por presos, que aunque las dos palabras empiecen por “pres”, no deberían conjugarse en una democracia seria. Lo malo es que Sánchez parece haber aceptado el cambio, a juzgar por sus palabras de condolencias (¡en el propio Parlamento!) por el suicidio en prisión del preso etarra Igor González Sola, al que calificó de preso vasco. González So-



Nadia Calviño, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en La Moncloa.

El único que parece seguro de sacar adelante los Presupuestos es el presidente del Gobierno

la había sido condenado en 2005 a 20 años de cárcel por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documentos, vinculado al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Lo mismo sucede desde el Gobierno de la Generalitat, desde donde están más interesados en la convocatoria de la mesa de diálogo entre España y Cataluña en la que quieren volver a plantear el derecho de autodeterminación. En este caso, las posibles negociaciones se pueden llegar a celebrar pese a las provocaciones diarias del expresidente catalán huido a Waterloo, Carles Puigdemont, y su marioneta de Barcelona, Quim Torra.

Pero lo más extraño de todo este proceso negociador, es la existencia de tres poderes distintos en el propio Palacio de la Moncloa, cada uno de ellos con unas propuestas diferentes para llevar a cabo su estrategia a largo plazo. En primer lugar, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al que han encargado el diálogo con ERC y EH Bildu, y cuyos planteamientos se alejan de la ortodoxia presupuestaria que impone Bruselas, con una cascada de gastos e impuestos de estilo colectivista.

En segundo lugar, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño (en tándem con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo), defensoras de las esencias europeas, intentan que avance la negociación con Ciudadanos y otros partidos minorita-

rios, mientras defienden unos presupuestos sin grandes aumentos de impuestos y con incrementos de gastos que puedan ser compensados en los años siguientes para que la deuda pública no se convierta en impagable. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene esa misma línea, aunque vaya a trompicones, dependiendo de la presión que reciba del ala de Unidas Podemos en el Ejecutivo.

Y sobre todos ellos emerge la figura de Pedro Sánchez, que un día da la razón a Calviño, otro a Iglesias y de vez en cuando cede ante las presiones independentistas. El presidente está con el ábaco en su mesa, sumando votos en el Parlamento, miles de millones en las cuentas públicas y cesiones políticas al soberanismo.

No es de extrañar, por tanto, que cada día surjan noticias contradictorias sobre las propuestas que llevará el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. No se sabe qué va a pasar con la reforma fiscal pactada en el programa de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos; ni con la subida de las pensiones, el salario mínimo o el sueldo de los funcionarios; ni mucho menos con los planes de inversiones públicas o los proyectos de escudo social; o la reforma laboral y los costes sociales de las empresas; ni con el reparto de las ayudas comunitarias; ni con las ayudas a empresas y autónomos... realmente no se sabe nada.

En esa vorágine de declaraciones, globos sonda, vetos, cesiones y cordones sanitarios, el único que parece seguro de sacar los Presupuestos adelante es el presidente del Gobierno. Aunque para ello tenga que ceder un poco a cada uno de los cuatro gobiernos presentes en la negociación.

LA AEDAF OPINA

En busca de una mayor recaudación con menores impuestos

En estos momentos donde parece que una reforma tributaria estructural habría quedado aparcada para un poco más adelante, puede que tengamos el tiempo necesario para reflexionar sobre su necesidad y su verdadera utilidad considerando los fines que se persiguen. ¿Y si en vez de subir la presión fiscal, vía creación de nuevos gravámenes o incremento de los actuales, se tratara de reactivar la economía, elevando el nivel general de riqueza y, por ende, consiguiendo una mayor recaudación de impuestos para las arcas del Estado?

El Gobierno español parece ver en una subida de impuestos, sea ahora o un poco más adelante, la única solución para afrontar el nivel actual de gasto público y el pago de la deuda pública de España. Pero quizás el Gobierno de España no está teniendo en cuenta que sí existe una alternativa a esa “inevitable” subida de impuestos que pasa por, tal y como están haciendo otros países de nuestro entorno, tratar de acelerar la recuperación económica vía introducción de nuevos incentivos fiscales y concesión de ayudas directas a los sectores afectados que, en nuestro caso, deberían venir acompañados por un eficiente uso a estos efectos de los esperados Fondos Europeos. Por un lado, se requiere una fiscalidad atractiva que permita no sólo la recuperación de las cuentas de resultados de nuestras empresas, sino también la incentivación del consumo, el empleo y la inversión y, por otro lado, debería acompañarse de un Plan de Reactivación Económica y Reindustrialización para el país, contribuyendo todo ello a esa espiral de

recuperación que tanto necesitamos.

El Gobierno de España debería ser consciente del riesgo de asfixia económica derivado de la eventual subida de impuestos que puede acabar provocando cierre de negocios, actividades e incluso de empresas, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo y por lo tanto generando una pérdida efectiva de recaudación. De nada servirán nuevos impuestos o incrementos de los existentes si en la práctica no tienen rentas que gravar. En efecto, una mayor recaudación debería ir ligada al gravamen de una mayor riqueza generada en lugar de al de una mermada riqueza existente.

Por otra parte, no debemos olvidar que el Gobierno debe actuar no sólo sobre los ingresos sino también sobre los gastos. Ahora, más que nunca se deben efectuar políticas de contención de gasto público, rediseñando prioridades y buscando mayores eficiencias en el funcionamiento de la Administración Pública. Queda mucho margen de actuación para “hacer más con menos”, un principio que el sector empresarial lleva años aplicando y que necesariamente debe ser trasladado a la función pública. Nos gustaría poder ver que una eventual reforma impositiva, caso de darse, viniera acompañada, por una vez, de un Plan de reforma y ajuste del funcionamiento de la Administración Pública.

Es vital que el Gobierno Español adopte la decisión correcta en esta materia puesto que de no ser así impactaría directamente en la ansiada senda de recuperación económica a la que necesitamos engancharnos lo antes posible.